

Junio 23 de 1948

16ª REUNION — 13ª SESION ORDINARIA

Presidencia de los doctores Héctor J. Cámpora y Raúl Bustos Fierro

Secretarios: doctores Leonidas Zavalla Carbó y Rafael V. González

DIPUTADOS PRESENTES:

Albrieu, Oscar E.  
Alvarez Pereyra, Manuel  
Añub, Rosendo  
Araoz, Ricardo E.  
Astorgano, José  
Añub, Luis  
Ayala López Torres, Francisco  
Bagnasco, Vicente  
Balbin, Ricardo  
Benítez, Antonio J.  
Beretta, Eduardo  
Bernández, Manuel  
Bldegain, Oscar E.  
Bonazzola, Romeo E.  
Bonino, Alberto C.  
Brugnerotto, Juan N. D.  
Bruno, Domingo  
Bustos Fierro, Raúl  
Butterfield, Humberto  
Cámpora, Héctor J.  
Camus, Eloy P.  
Candioti, Alberto M.  
Cané, José  
Carreras, Ernesto A.  
Casas Noblega, Armando  
Cattaneo, Atilio E.  
Colom, Eduardo  
Conte Grand, José Amadeo  
Cooke, John William  
Cufre, Orlando H.  
Cursack, Roberto Enrique  
Dávila, J. Anibal  
Decker, Rodolfo A.  
Degreaf, Juan Ramón  
De la Torre, Juan  
Del Carril, Emilio Donato  
Del Mazo, Gabriel  
Delleplane, Luis  
Díaz, Carlos A.  
Díaz, Manuel M.

Díaz de Vivar, Joaquín  
Dri, Roberto  
Erro, Saturnino S.  
Estrada, Angel C.  
Fajre, José Benito  
Fernández, Hernán S.  
Ferrando, Manuel P.  
Ferrer, Modesto  
Filippo, Virgilio M.  
Forteza, Eduardo Julio  
Fregossi, Luis J.  
Garaguso, Bernardino Hipólito  
Garay, Marcelino S.  
García, Manuel  
Gil Flood, Mario  
González Funes, Tomás  
Guardo, Ricardo C.  
Haramboure, Horacio  
Ibarguren, Prudencio M.  
Illia, Arturo U.  
Lagraña, Héctor D.  
Larco, Ricardo  
Lasclar, Guillermo F.  
Lavía, Ludovico  
Leloir, Alejandro H.  
Lema, Manuel E.  
Letamendi, Balbino (h.)  
Liceaga, Félix J.  
López Serrot, Oscar  
Lucini, Raúl Felipe  
Mac Kay, Luis R.  
Maineri, D. Jacinto  
Malecek, José Enrique  
Mántaras, Manuel J.  
Marlategui, Angel S.  
Marotta, José  
Martínez Guerrero, Guillermo  
Martínez Luque, Enrique  
Mercader, Emir E.  
Messina, Humberto  
Miel Asquía, Angel J.

Monjardin, Federico F.  
Montes, Juan Manuel  
Montes de Oca, Carlos  
Montiel, Alcides E.  
Moreno, José Luis  
Noriega, Juan J.  
Novellino, Francisco  
Osinalde, Rafael  
Otonello, Benito J.  
Palacio, Ernesto  
Parry, Roberto  
Pasquall, Juan Domingo  
Pasquini, José P. D.  
Pastor, Reynaldo A.  
Perea, Pedro J.  
Pereyra, Luis Alberto  
Pérez Martín, José  
Pierotti, Mario  
Pirani, Antonio S.  
Ponce, Angel L.  
Pontieri, Silverio  
Rabanal, Francisco  
Repetto, Agustín  
Reynés, Leandro R.  
Roche, Luis Armando  
Rodríguez, Manuel  
Rodríguez, Nerio M.  
Rodríguez Araya, Agustín  
Rodríguez de la Torre, Raúl  
Rojas, Absalón  
Rojas, Nerio  
Rossi, José  
Rudi, Ricardo  
Rumbo, Eduardo I.  
Sammartino, Ernesto E.  
San Millán, Ricardo Antonio  
Santander, Silvano  
Saporiti, Luis  
Saravia, Teodoro S.  
Sarmiento, Manuel  
Seeber, Carlos Manuel  
Silvestre, Adolfo J. B.

Sobral, Antonio  
Solá, Fernando  
Tejada, Ramón Washington  
Tommasi, Victorio M.  
Uranga, Raúl L.  
Urtiaga Bilbao, Mateo de  
Valdez, Celestino  
Vanasco, Julio A.  
Varen, Isidoro  
Velloso Colombres, Manuel F.  
Vergara, Amando  
Villacorta, Luis René  
Villafañe, José María  
Visca, José Emilio  
Vischi, Albino  
Vítolo, Alfredo R.  
Yadrola, Mauricio L.  
Zamudio, Juan Carlos  
Zanoni, Pedro P.  
Zavala Ortiz, Miguel Angel

AUSENTES, CON LICENCIA:

Córdova, J. Salvador  
Frondizi, Arturo  
Ricagno, Roberto  
Rouglier, Valerio S.  
Sánchez, Pedro  
Toro, Ricardo

AUSENTES, CON AVISO:

Cleve, Ernesto  
Curchod, Amado J.  
Marini, Angel C.  
Rubino, Sidney Nicolás  
Tilli, Pedro

AUSENTES, SIN AVISO:

Argaña, José M.  
Giménez Vargas, Francisco

SUMARIO

1.—Versiones taquigráficas.

2.—Asuntos entrados:

- I.—Comunicaciones del Honorable Senado.
- II.—Comunicaciones oficiales.
- III.—Comunicaciones de comisión.
- IV.—Despachos de comisión.

V.—Peticiones particulares.

VI.—Proyecto de ley del señor diputado  
Liceaga: construcción de un barrio de viviendas económicas en terrenos ocupados por el Golf Club de Buenos Aires.

VII.—Proyecto de ley del señor diputado  
Haramboure: subsidio, para obras, al Sindicato de Obreros y Empleados de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de la Destilería La Plata.

VIII.—Proyecto de ley del señor diputado Forteza: creación de un liceo nacional de señoritas en Bahía Blanca (Buenos Aires).

IX.—Proyecto de ley del señor diputado García: modificación de la ley 12.908, de estatuto del periodista profesional, en lo relativo a la inscripción en la Escuela de Periodismo, carnet profesional, suministro de noticias por agencias, y régimen de vacaciones y licencias.

X.—Proyecto de ley del señor diputado Zamudio: monumento al Cuerpo de Blandengues, en Mercedes, Buenos Aires.

XI.—Proyecto de ley del señor diputado Rodríguez Araya: pensión a la señora Nemesia Caffarena de Ravaschino.

XII.—Proyecto de ley de los señores diputados Lucini y Atala: subsidio, para obras, al Club Atlético Unión, de la localidad de Alicia, Córdoba.

XIII.—Proyecto de ley de los señores diputados Rudi y Balbin: creación de una escuela agricolagánadera en Tres Arroyos, Buenos Aires.

XIV.—Proyecto de ley reproducido por los señores diputados Mac Kay y Mailneri: expropiación y subdivisión de un campo en Pehuajó, Buenos Aires.

XV.—Proyecto de ley del señor diputado Pastor: pensión a las señoritas Josefa Ernestina y María Nieves Falcón.

XVI.—Proyecto de ley del señor diputado Martínez Luque: subsidio, para obras, a la municipalidad de General Deheza, Córdoba.

XVII.—Proyecto de ley del señor diputado Seeber: cambio de la leyenda Sociedad de Fomento y Cultura Grossville por la de Sociedad de Fomento y Cultura Roberto M. Ortiz en la partida de subsidio, incluida en la ley 13.073, ampliatoria del presupuesto general de gastos de la Nación para 1948.

XVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Sarmiento: creación de una escuela hogar de protección de menores y enseñanza de práctica agricolagánaderas en Maimará, Jujuy.

XIX.—Proyecto de ley del señor diputado Sarmiento y otros: creación del Consejo Técnico Nacional de Minas y Geología dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio.

XX.—Proyecto de ley reproducido por el señor diputado Viscar: monumento al Soldado Desconocido de la Independencia.

XXI.—Proyecto de ley del señor diputado Zamudio: defensa sanitaria del hombre y los animales contra las zoonosis.

XXII.—Proyecto de ley del señor diputado Mac Kay: pensión a los señores Eloy Eleazaro Cabrera, Lorenzo Gabriel Etcheverry, Peregrino García, José Calazany Chaparro y Peregrino Alpières.

XXIII.—Proyecto de ley del señor diputado Mac Kay por el que se declara que no está en vigencia el decreto 18.405/43 que dispone la obligación de exhibir en salas cinematográficas noticiarios argentinos.

XXIV.—Proyecto de ley del señor diputado Mac Kay: subsidios, para obras y adquisición de materiales de aeronáutica, al Aero Club Gualaguay, de Gualaguay, Entre Ríos.

XXV.—Proyecto de ley de los señores diputados Rubino y Rodríguez Araya: modificación de la ley 9.688, de accidentes del trabajo.

XXVI.—Proyecto de ley de los señores diputados Rubino y Rodríguez Araya: subsidio a la Sociedad de Beneficencia, de Rosario.

XXVII.—Proyecto de ley del señor diputado Rodríguez Araya: subsidio, para obras, al Club Uría, de Rosario.

XXVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Rodríguez Araya: subsidio a la Comisión de Regatas del Río Paraná.

XXIX.—Proyecto de ley del señor diputado Rodríguez Araya: subsidio, para obras, al Club Gimnasia y Esgrima, de Rosario.

XXX.—Proyecto de ley del señor diputado Rumbo y otros: caducidad de patentes de invención.

XXXI.—Proyecto de ley del señor diputado Tejada: puente carretero sobre el río San Juan y obras complementarias, en La Cañada, departamento de Angaco, San Juan.

XXXII.—Proyecto de ley del señor diputado del Mazo: subsidio a la Sociedad Cooperativa de Criadores de Aves y Conejos, de la Capital Federal.

XXXIII.—Proyecto de ley del señor diputado Díaz de Vivar: subsidio al Patronato de la Infancia.

- XXXIV.—Proyecto de ley del señor diputado Monjardin y otros: edificio para Correos y Telecomunicaciones en General Villegas, Buenos Aires.
- XXXV.—Proyecto de ley del señor diputado Monjardin y otros: instalaciones deportivas para la Escuela Normal Mixta Florentino Ameghino, de Luján, Buenos Aires.
- XXXVI.—Proyecto de ley del señor diputado Bonino y otros: construcción de línea férrea entre Estación Marini y Estación Eusebia, en la provincia de Santa Fe.
- XXXVII.—Proyecto de ley del señor diputado García: depósito en la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Buenos Aires de sumas de dinero entregadas en garantía por arrendatarios de cosas muebles e inmuebles y de usuarios de suministros o servicios en la Capital Federal.
- XXXVIII.—Proyecto de ley del señor diputado Fregossi y otros: inscripción de nacimientos ocurridos en la Capital Federal y territorios nacionales.
- XXXIX.—Proyecto de ley de los señores diputados Fregossi y Tommasi: edificio para la Escuela Normal Mixta número 3, Almaguer, de la ciudad de La Plata.
- XL.—Proyecto de ley del señor diputado Pontieri: subsidio a la Sociedad de Fomento Unión Vecinal Pro Escuela y Caminos, de Angel Etcheverry, Buenos Aires.
- XLI.—Proyecto de ley de los señores diputados Cooke, Guardo y otros: reforma a la Constitución nacional.
- XLII.—Proyecto de declaración del señor diputado Lucini y otros: expresión del anhelo de la Honorable Cámara de que se construya el edificio de la Escuela Nacional 277, de Cruz del Eje, Córdoba.
- XLIII.—Proyecto de declaración del señor diputado Lucini: adopción de medidas tendientes a la provisión de agua potable a varias localidades de la provincia de Córdoba.
- XLIV.—Proyecto de declaración del señor diputado Colom, por el que se expresa el deseo de que se instale una sucursal del Banco de la Nación Argentina, en Leandro N. Alem, Misiones.
- XLV.—Proyectos de resolución y de declaración en la mesa de la Honorable Cámara:
- 1.—Del señor diputado Rodríguez Araya y otros: pedido de informes al Poder Ejecutivo relacionados con las sociedades «Grupo Bemberg».
  - 2.—De los señores diputados Mac Kay y Balbín: expresión de anhelo de la Honorable Cámara sobre comentarios de discursos en escuelas y colegios oficiales.
  - 3.—Del señor diputado Frondizi y otros: entrega a la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de los bienes de la Compañía Ferrocarrilera del Petróleo.
  - 4.—Del señor diputado Frondizi y otros: pedido de informes al Poder Ejecutivo relacionados con el contrato suscrito por Yacimientos Petrolíferos Fiscales con la compañía Drilexco para la perforación de pozos de exploración.
  - 5.—Del señor diputado Lucini, sobre realización de obras para la provisión de agua potable a localidades de la provincia de Córdoba.
  - 6.—Del señor diputado Zanon y otros: provisión de camarote para uso personal a camareros que prestan servicios en coches dormitorios del ferrocarril.
- 3.—Concédese licencia para faltar a sesiones a los señores diputados Sánchez, Rouggier, Frondizi, Bidegain, Ricagno y Toro.
  - 4.—Juramento e incorporación del señor diputado electo por Santa Fe, doctor Sidney Nicolás Rubino.
  - 5.—Homenaje a Juan Agustín García.
  - 6.—Homenaje al general Belgrano.
  - 7.—Manifestaciones aclaratorias de conceptos vertidos en debates de la Honorable Cámara.
  - 8.—Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Sammartino con motivo de publicaciones periodísticas.
  - 9.—Continúa la consideración del proyecto de resolución del señor diputado Bagnasco sobre designación de una comisión especial encargada de estudiar la derogación de la ley 4.144, de extranjería, y de proyectar el estatuto legal para el mantenimiento del orden público.

- 10.—Indicación del señor diputado Colom de pronto despacho del proyecto de ley sobre reformas a la Constitución nacional.
- 11.—Moción del señor diputado Miel Asquía: fijación del orden de consideración de asuntos.
- 12.—Moción del señor diputado Brugnerotto de preferencia para la consideración del proyecto de ley que establece la compensación a acordarse a la Municipalidad de Rosario por la transferencia del hospital Centenario e Instituto de Enseñanza médica.
- 13.—Indicación del señor diputado Manuel M. Díaz de pronto despacho del proyecto de ley por el que se extienden franquicias de la ley de aduana al puerto de Santa Fe.
- 14.—Indicación del señor diputado Candiotti de pronto despacho del proyecto de declaración sobre sanción de los proyectos de ley de urbanización del bañado de Flores y sobre estatuto del personal bancario.
- 15.—Indicación del señor diputado Mac Kay: integración de la Comisión Parlamentaria Encargada de Projectar el Seguro Agrícola Estatal Obligatorio.
- 16.—Indicación del señor diputado Pastor: fijación de planes de labor de la Honorable Cámara.
- 17.—Indicación del señor diputado Rabanal de preferencia para la consideración del proyecto de ley del señor diputado López Serrot y otros, sobre suspensión de juicios de desalojo promovidos para la construcción del camino al aeródromo de Ezeiza.
- 18.—Consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Extranjeros y de Culto en el proyecto de ley, en revisión, por el que se aprueban resoluciones del V Congreso, de Río de Janeiro, de la Unión Postal de las Américas y de España. Se sanciona.
- 19.—Consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Extranjeros y de Culto en el proyecto de ley, en revisión, por el que se aprueba la convención sobre reglamentación del tránsito automotor interamericana. Se sanciona.
- 20.—Consideración del despacho de la Comisión de Asuntos Extranjeros y de Culto en el proyecto de ley por el que se aprueban los convenios postales internacionales firmados en Buenos Aires el 23 de mayo de 1939. Se sanciona.
- 21.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley sobre adopción de menores.
- 22.—Apéndice:

I.—Nómina de asuntos que pasan al archivo.

II.—Inserciones.

—En Buenos Aires, a los veintitrés días del mes de junio de 1948, a la hora 16:

# I

## VERSIONES TAQUIGRAFICAS

Sr. Presidente (Cámpora). — Queda abierta la sesión con la presencia de 82 señores diputados.

Si no se hacen observaciones a las versiones taquigráficas correspondientes a las sesiones de los días 16 y 17 del corriente mes se autenticarán y archivarán.

—Sin observación, se dan por aprobadas las versiones taquigráficas de las sesiones de los días 16 y 17 de junio de 1948.

# 2

## ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Cámpora). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.

# I

## Comunicaciones del Honorable Senado

El Honorable Senado comunica que ha designado a los señores senadores César Vallejo, Vicente Leonides Saadi, Arcadio B. Avendaño y Lorenzo Soler (h.) para integrar la Comisión Especial Encargada del Estudio de la Situación Financiera, Económica, Política y Social de las Provincias del Norte y Noroeste y Territorios Nacionales. (A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)

## SANCIÓN DEFINITIVA:

En el proyecto de ley sobre otorgamiento del importe de dietas a las viudas de los ex diputados Jabel Arévalo Cabeza, José R. Lencinas y Diógenes C. Antille. (Al archivo.)

# II

## Comunicaciones oficiales

El señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto formula manifestaciones relacionadas con la declaración de la Honorable Cámara sobre refirmación de derechos argentinos en las islas Malvinas y la Antártida.

Sr. Candiotti. — Señor presidente: sería interesante conocer las manifestaciones del señor ministro de Relaciones Exteriores.

Sr. Presidente (Cámpora). — Se trata de congratulaciones.



correspondencia que se le entregue en las condiciones establecidas por esta ley, y de acuerdo con los reglamentos».

El 15 dice: «La administración de correos no asume responsabilidad alguna por la correspondencia que se le confíe para su transporte; pero la tendrán personalmente los empleados, por negligencia o abusos que cometan».

Y el artículo 99 de la misma ley dice: «La inviolabilidad de la correspondencia importa la obligación de no abrir, ni substraer ninguno de los objetos confiados al correo, de no tratar de ninguna manera de conocer su contenido, así como de no hacer saber qué personas mantienen relación entre sí, y la de no dar a nadie la ocasión de cometer tales faltas».

Por su parte el Código Penal, en el capítulo relativo a los delitos contra la libertad de las personas, dispone en el artículo 161 que «sufirá prisión de uno a seis meses el que impidiere o estorbare la libre circulación de un libro o de un periódico». Además, el artículo 248 es aplicable a los funcionarios públicos que dictaran resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes, y el artículo 249 se aplica a los funcionarios que se negaran a cumplir o retardaran el cumplimiento de algún acto relativo a su oficio.

De manera que en la República Argentina constituye delito impedir o estorbar la libre circulación de un libro o de un periódico, y los compromisos internacionales que el país contrae también obligan a facilitar su libre difusión.

En este convenio se establece que las administraciones se remitirán entre sí una lista de periódicos que son susceptibles de suscripción por intermedio del correo. Y como se temió que esa lista oficial estuviera integrada exclusivamente por diarios que fueran gratos a los respectivos gobiernos, por otro artículo se establece que cuando un ciudadano quiera suscribirse a un diario no incluido en la lista oficial, podrá hacerlo, y la administración de correos estará en la obligación de tramitar la suscripción.

Pero mientras el director de correos de nuestro país contraviene las disposiciones penales citadas y dijo al diputado que habla que «no dará trámite ni permitirá la entrega del diario «Provincias Unidas» porque habla mal del gobierno», resulta increíble que la República Argentina esté firmando convenios internacionales que sabemos que no va a cumplir.

Pero los diputados radicales, hecha esta aclaración, van a consagrar con su voto la sanción de esta convención, en la esperanza de que alguna vez los gobiernos que firman estas convenciones hagan honor a su firma y que por pudor y ética respeten lo que han firmado.

**Sr. Presidente (Bustos Fierro).** — Se va a votar en general el despacho de la Comisión de Asuntos Extranjeros y de Culto.

—Resulta afirmativa de 92 votos; votan 100 señores diputados.

**Sr. Presidente (Bustos Fierro).** — En consideración en particular el artículo 1º.

Se va a votar.

—Resulta afirmativa de 97 votos; votan 107 señores diputados.

—El artículo 2º es de forma.

**Sr. Presidente (Bustos Fierro).** — Queda sancionado el proyecto de ley.

21

### ADOPCION DE MENORES

(Orden del día número 38)

*Honorable Cámara:*

La Comisión de Legislación General ha estudiado los proyectos de ley sobre adopción de menores, presentados por los señores diputados Beretta y otros y Peña Guzmán y otros; y, por las razones que dará el miembro informante, aconseja la sanción del siguiente

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — La adopción crea un vínculo legal de familia.

Art. 2º — Cualquier menor hasta los dieciocho años puede ser adoptado, por resolución judicial, a instancia del adoptante.

Art. 3º — El adoptante debe ser, por lo menos, dieciocho años mayor que el adoptado. Nadie puede ser adoptado por más de una persona, salvo que los adoptantes sean cónyuges.

Art. 4º — No podrá adoptarse más de un menor de cada sexo por persona o matrimonio. Se exceptúan:

- a) Si las adopciones se efectuaran todas en el mismo acto;
- b) Si el nuevo adoptado es hermano de alguno de los menores ya adoptados o hijo ilegítimo del adoptante nacido posteriormente a la primera adopción.

Art. 5º — No podrá adoptar:

- a) Quien tenga descendientes legítimos concebidos o nacidos, salvo que estos últimos se encontraran ausentes con presunción de fallecimiento;

- b) Quien tenga hijos naturales reconocidos;
- c) Quien no haya cumplido cuarenta años, salvo los cónyuges que tengan más de ocho años de casados;
- d) Los religiosos profesos de uno u otro sexo.

Art. 6º — El adoptante probará haber atendido al menor durante dos años anteriores al momento de la demanda, con los cuidados de un padre. Esta prueba no se requiere cuando se adopta el hijo propio o el hijo del cónyuge.

Art. 7º — El tutor sólo podrá adoptar al pupilo después de aprobadas sus cuentas y pagado el saldo.

Art. 8º — Ninguna persona casada podrá adoptar sin el consentimiento de su cónyuge, expresado judicialmente. El consentimiento no es necesario:

- a) Cuando media divorcio declarado por juez competente;
- b) Cuando se encuentren separados de hecho sin voluntad de unirse;
- c) Cuando el cónyuge ha sido declarado insano;
- d) Cuando el cónyuge ha sido declarado ausente con presunción de fallecimiento.

Art. 9º — Son aplicables al juicio de adopción las siguientes reglas:

- a) La demanda debe interponerse ante el juez del domicilio del adoptante;
- b) Son parte en el juicio: el adoptante, el padre o madre del menor si no hubiesen perdido la patria potestad; el Ministerio de Menores; en su caso, el representante legal del menor;
- c) El juez oírá personalmente al adoptado, si fuera mayor de diez años y podrá oír a otras personas interesadas en la adopción;
- d) El adoptante acreditará cualidades morales y medios de vida suficientes, a juicio del juez;
- e) El juez apreciará si la adopción es conveniente para el menor.

Art. 10. — Los efectos de la adopción se producen desde la fecha de la sentencia.

Art. 11 — La adopción puede ser declarada después de la muerte del adoptante, si el fallecimiento ocurriera después de interpuesta la demanda. En este caso los efectos de la sentencia se retrotraen a la fecha del fallecimiento del adoptante.

Art. 12. — El parentesco que crea la adopción se limitará al adoptante y al adoptado, quien

será considerado como hijo legítimo. El adoptado no adquiere vínculo familiar con los parientes del adoptante, ni derechos sucesorios por representación.

Art. 13. — La adopción impone al adoptado el apellido del adoptante, sin perjuicio de que agregue el suyo propio.

Art. 14. — Los derechos y deberes que resulten del parentesco de sangre del adoptado no quedan extinguidos por la adopción, excepto los de la patria potestad que se transfieren al padre adoptivo.

Art. 15. — El adoptante administra pero no tiene el usufructo de los bienes del adoptado. El cónyuge adoptante sobreviviente tiene el usufructo de los bienes que el adoptado adquiriera en la sucesión del cónyuge adoptante premuerto.

Art. 16. — El adoptante no hereda ~~ab~~ intestato al adoptado. Los descendientes legítimos del adoptado tienen derecho de representación en la sucesión del adoptante.

Art. 17. — No pueden contraer matrimonio:

- a) El adoptante con el adoptado o alguno de sus descendientes;
- b) El adoptado con el cónyuge del adoptante y, recíprocamente, el adoptante con el cónyuge del adoptado;
- c) Los hijos adoptivos del mismo adoptante entre sí;
- d) El adoptado con un hijo del adoptante.

Art. 18. — Es revocable la adopción:

- a) Por haber incurrido el adoptado o el adoptante en indignidad en los supuestos previstos por el Código Civil para impedir la sucesión; y también por haberse negado alimentos sin causa justificada;
- b) Por acuerdo de partes manifestado judicialmente, cuando el adoptado fuere mayor de edad;
- c) En virtud de impugnación justificada deducida por el adoptado dentro del término de un año siguiente a su mayoría.

Art. 19. — La revocación produce efectos desde su declaración judicial.

Art. 20. — La adopción, su revocación o nulidad deben inscribirse en el Registro de Estado Civil.

Art. 21. — Hasta tres años de promulgada esta ley se podrá solicitar la adopción de personas prescindiendo de la exigencia establecida en el artículo 2º, si el requisito del artículo 6º se ha comenzado a cumplir antes de la sanción de esta ley. En estos casos, si el adoptado fuera casado, se requerirá el consentimiento de su cónyuge.

Art. 22. — Las disposiciones de la presente ley quedan incorporadas al Código Civil.

Art. 23. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión, 18 de junio de 1948.

*Antonio J. Benítez. — Manuel F. Velloso Colombres. — Raúl Bustos Fierro. — Humberto Butterfield. — Domingo Bruno. — Juan de la Torre. — Tomás González Funes. — Absalón Rojas. — Mauricio L. Yadarola.*

En disidencia parcial en cuanto a las nulidades, que deben ser las siguientes:

Artículo .. — Adolecerá de nulidad absoluta la adopción obtenida en violación de los preceptos relativos:

- a) A las condiciones formales del acto constitutivo;
- b) A la diferencia de edad entre adoptante y adoptado.

Artículo .. — Adolecerá de nulidad relativa la adopción obtenida en violación de los preceptos relativos:

- a) A la exigencia de que no exista descendencia del adoptante;
- b) A la edad mínima del adoptante;
- c) A la ausencia o vicios de consentimiento.

*Absalón Rojas. — Mauricio L. Yadarola.*

## ANTECEDENTES

### I

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

Artículo 1º — La adopción se instituye con el objeto de amparar a los menores material o moralmente abandonados, ya sean huérfanos o hijos de padres legítimos o naturales. Sólo en tales condiciones puede ser adoptado un menor de 18 años por una persona o por los cónyuges de un matrimonio.

Art. 2º — Si el adoptante fuera casado, ambos cónyuges deben prestar su conformidad. En caso de ausencia declarada, no se exigirá la conformidad del otro cónyuge. Sólo podrán adoptar los mayores de cuarenta años sin descendencia legítima o natural reconocida. Los cónyuges sólo podrán hacerlo después de diez años de matrimonio siempre que no tengan hijos legítimos en el momento de la adopción. La separación o divorcio ulterior no exime a ambos cónyuges de las obligaciones respecto del menor.

Art. 3º — La adopción, para que exista como tal, debe ser declarada judicialmente, declaración que sólo tendrá lugar después de una amplia justificación de

las condiciones morales y capacidad económica del adoptante, sin perjuicio de las investigaciones que el juzgado estime necesarias, debiéndose dejar de todo ello debida constancia en la resolución judicial que la acuerde, así como la prohibición de que el menor sea destinado al servicio doméstico en beneficio propio o de terceros.

Art. 4º — Además de la edad y de las condiciones morales y materiales del adoptante, para que la adopción sea judicialmente declarada, se requiere que el menor cuya adopción se solicita haya estado durante dos años bajo la protección y cuidado del adoptante.

Art. 5º — El tutor o curador no podrá adoptar a sus representados hasta después de haberse aprobado las cuentas y abonado el saldo.

Art. 6º — La declaración judicial de adopción aparea para el padre del adoptado la pérdida de la patria potestad, que la adquiere el adoptante, sin que el padre natural se exima de responder a las obligaciones que comporta la misma, si materialmente el menor quedara abandonado.

Art. 7º — Declarada judicialmente la adopción, el adoptado adquiere la calidad de hijo legítimo del adoptante con todos los derechos y obligaciones civiles de tal estado, pero no entra en la familia del adoptante ni adquiere derechos sucesorios por representación. Por su parte el adoptante, sobre los hijos del adoptado, adquiere los mismos derechos y obligaciones que confiere el Código Civil sobre la persona y bienes de sus descendientes legítimos.

Art. 8º — Los hijos legítimos o naturales del adoptante no afectan los derechos que pudieran corresponderle al adoptivo en la sucesión de su padre por adopción.

Art. 9º — Comuníquese, etc.

*Eduardo Beretta. — Manuel Alvarez Pezra. — F. Daniel Mendiando.*

### II

#### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### CAPÍTULO I

##### *De la adopción*

Artículo 1º — Podrán adoptar las personas de existencia visible que hayan cumplido cuarenta años de edad y que carecen de descendencia legítima o natural reconocida. Se reduce a treinta y cinco años la edad mínima de la mujer adoptante.

Art. 2º — Se permitirá también la adopción:

- a) Al incapaz para generar que haya cumplido los 35 años;
- b) A los cónyuges que tengan más de 10 años de casado, sin límite mínimo de edad.

Art. 3º — No podrán adoptar:

- a) Los eclesiásticos regulares ni los religiosos profesos de uno u otro sexo;
- b) El tutor o curador de sus representados, hasta haber sido aprobadas las cuentas de su administración y satisfecho el saldo;
- c) Quienes no gocen de buena reputación.

Art. 4º — La adopción exige, por parte del adoptante, la tenencia previa durante dos años de la persona que pretende adoptar. La adopción sólo procederá cuando medien justos motivos que excluyan toda maniobra ilícita y presente ventajas para el adoptado.

Art. 5º — El adoptante que fuese casado deberá adoptar juntamente con su cónyuge, exceptuándose los casos de impedimentos por incapacidad, residencia ignorada, divorcio o separación de cuerpos o cuando se adopta a los hijos de cónyuge.

En caso de divorcio o separación de cuerpos el cónyuge inocente podrá prescindir del consentimiento del culpable; pero éste deberá ser oído si no estuviera impedido.

Art. 6º — Se puede adoptar a varias personas en actos sucesivos o simultáneos.

Art. 7º — Sólo podrá ser adoptado el menor que no ha cumplido los 18 años de edad.

El hijo ilegítimo puede ser adoptado por su padre siempre que no haya nacido durante el matrimonio del adoptante.

Art. 8º — Nadie podrá ser adoptado por más de una persona, salvo el caso de los cónyuges adoptantes.

Art. 9º — Para que proceda la adopción se requiere el consentimiento:

- a) Del adoptante; cuyos padres serán oídos;
- b) Del adoptado y de sus padres o representantes legales. Si el adoptado es mayor de doce años deberá prestar su consentimiento expreso;
- c) Del cónyuge del adoptado.

El juez podrá suplir la negativa injustificada de los representantes legales del menor, mediante auto fundado; la de sus padres sólo cuando estuvieran privados de la patria potestad o tenencia de sus hijos o que hubieran dado causa para dichas sanciones.

El fallo que desestime la negativa de uno u otro será apelable.

Art. 11. — La adopción será declarada por los jueces. Será tribunal competente el de 1ª instancia del domicilio del adoptante, ante el que se presentarán los respectivos consentimientos y serán oídos los interesados.

El adoptante y el adoptado prestarán personalmente sus consentimientos, salvo que justifiquen debidamente la imposibilidad de concurrir.

Las demás personas cuyo consentimiento se exige, lo harán ante el juez o por instrumento público.

Art. 12. — Podrá revocarse el consentimiento hasta que se dictare sentencia definitiva.

Si el adoptante falleciere después de prestado su consentimiento, el procedimiento continuará y en caso de pronunciarse la adopción, ésta surtirá sus efectos desde la muerte del adoptante.

Art. 13. — El juez, previo dictamen fiscal y del asesor de menores; habiendo comprobado el cumplimiento de los extremos legales; si median justos motivos; si la adopción es ventajosa para el adoptado; y si el adoptante goza de buena reputación, resolverá si acepta o rechaza la adopción, en auto fundado que deberá pronunciarse dentro de los 20 días. La resolución será apelable.

Art. 14. — Cuando medie resolución favorable, el juez ordenará la inscripción de la adopción en el Registro Civil correspondiente.

La adopción surte efecto entre las partes desde la notificación de la sentencia definitiva y respecto a

terceros desde su inscripción en el Registro Civil correspondiente.

Art. 15. — Los registros civiles de cada provincia y de la Capital Federal, inscribirán las adopciones en un libro o sección especial. En la Capital Federal funcionará además un Registro General de Adopciones, al que remitirán los registros provinciales los datos referentes a las inscripciones que efectúan.

Art. 16. — El adoptado adquiere la situación de hijo legítimo del adoptante; pero el vínculo adoptivo liga solo al adoptante, al adoptado y a los descendientes legítimos de este último, nacidos antes o después de la adopción.

Art. 17. — Subsisten todos los deberes y derechos del adoptado con respecto a su familia de origen, excepto la patria potestad que pasa íntegramente al adoptante.

En el caso de adopción conjunta por dos cónyuges, se aplicará en materia de patria potestad sobre el adoptado, las disposiciones concernientes al hijo legítimo en las mismas circunstancias.

Cuando el adoptante adopta al hijo del cónyuge, ambos ejercen concurrentemente la patria potestad.

Si el adoptante pierde la patria potestad por muerte, incapacidad o ausencia declarada judicialmente, ésta vuelve de pleno derecho a los padres naturales del adoptado.

La patria potestad del adoptante se pierde en las mismas condiciones que la de los padres de sangre.

Art. 18. — El adoptante administrará los bienes del adoptado incapaz, sin usufructo legal, sometándose a las reglas de la tutela.

Los bienes del menor serán previamente inventariados y tasados y el adoptante prestará caución, cuyo monto se determinará judicialmente.

Las rentas podrán ser invertidas en el sostenimiento y educación del menor, debiendo emplear el excedente en forma provechosa.

Art. 19. — No podrán contraer matrimonio:

- a) El adoptante con el adoptado o con los descendientes de éste;
  - b) El adoptante con el cónyuge del adoptado y recíprocamente el adoptado con el cónyuge del adoptante;
  - c) El adoptado con los ascendientes del adoptante.
- Sin embargo los impedimentos matrimoniales podrán ser dispensados judicialmente si median causas graves.

Art. 20. — El adoptado agregará al suyo el apellido del adoptante, transmitiéndolo en las mismas condiciones a sus descendientes legítimos, sin distinción entre nacidos con posterioridad o anterioridad a la adopción.

Si el adoptado fuera un hijo ilegítimo no reconocido, reemplazará su apellido por el del adoptante.

En las adopciones hechas conjuntamente por dos cónyuges, el adoptado tomará el apellido del marido.

Art. 21. — La obligación alimentaria es recíproca entre el adoptante, adoptado, y los descendientes legítimos de este último.

Los padres del adoptado deberán prestarle alimento sólo en el caso en que no pudiera procurárselos el adoptante.

Art. 22. — El adoptante no hereda ab intestato al adoptado ni a sus descendientes.

Art. 23. — El adoptado no tiene ningún derecho en la sucesión de los parientes del adoptante; pero a la de este último concurre en la calidad de hijo legítimo.



Los hijos legítimos del adoptado heredan al adoptante.

En caso de que el adoptado concorra a la sucesión del adoptante con los hijos naturales de éste, le corresponderá el doble de la cuota que se le adjudique al hijo natural.

Art. 24. — El adoptado y sus descendientes legítimos podrán ejercer la acción de reducción sobre las donaciones a título gratuito hechas por el adoptante con posterioridad al acto de la adopción, cuando esas donaciones afecten su legítima.

Art. 25. — Si el adoptado muere sin descendientes legítimos, las cosas donadas por el adoptante o recibidas en su sucesión y que existieran en naturaleza a la fecha de la muerte del adoptado, retornarán al adoptante, a sus descendientes aun adoptivos o a su cónyuge.

Si viviendo el adoptante y después de la muerte del adoptado, los hijos o descendientes dejados por éste mueren ellos mismos sin posteridad, el adoptante les sucede en las cosas por él donadas, como se ha dicho en el artículo precedente; pero este derecho es inherente a la persona del adoptante y no transmisible a sus herederos, aun en línea descendente.

Art. 26. — La supernacencia de hijos legítimos del adoptante no hace cesar la adopción; pero ésta quedará sin efecto si el hijo se hallaba concebido al formalizarse la adopción.

Tampoco se extinguirá la adopción por el reconocimiento que hiciera el adoptante de hijos ilegítimos sean supernacidos, preexistentes o atribuidos al adoptante por sentencia judicial posterior a la adopción.

Art. 27. — Producirá nulidad absoluta la inobservancia:

- a) De los requisitos de forma;
- b) De los requisitos de fondo.

Acarrearán nulidad relativa los vicios de consentimiento.

Art. 28. — La acción de nulidad absoluta de la adopción podrá intentarse en vida del adoptante o hasta diez años después de su muerte; la nulidad relativa, en vida del adoptante o hasta cinco años después de su muerte, sin perjuicio de la prescripción que correspondiere.

Art. 29. — Podrá solicitarse la revocación de la adopción:

- a) Por indignidad del adoptado en los casos previstos en la ley civil para impedir la sucesión; y también si hubiese negado alimentos al adoptante sin motivos justificados;
- b) Por causa del adoptante, cuando hubiese incurrido en indignidad, con referencia al adoptado, su cónyuge, ascendientes o descendientes;
- c) Por acuerdo de las partes, siendo mayores; si no lo fuere el adoptado lo decidirá el juez, con audiencia de quienes prestaron su consentimiento;
- d) Por impugnación justificada, deducida por el menor o el incapaz dentro del año siguiente a su mayoría o a la fecha en que desapareció la interdicción;
- e) Por el ministerio público, en interés de la moral y buenas costumbres.

Art. 30. — La sentencia de revocación dictada por el tribunal de primera instancia, en virtud de derecho

común y según el procedimiento ordinario, y después de oír al ministerio público y al asesor de menores, deberá ser motivada. El fallo es apelable. Se hará la inscripción de acuerdo a los artículos 14 y 15.

Art. 31. — La revocación hace cesar para el futuro todos los efectos de la adopción.

Las donaciones hechas por el adoptante al adoptado o sus descendientes, quedan firmes, si la revocación no hubiese sido dictada por ingratitud del adoptado; y conservarán respecto a ellos, el adoptante y sus descendientes, el derecho de retorno reglamentado en el artículo 25.

## CAPÍTULO II

### De la afiliación

Art. 32. — La persona que provea al cuidado o sostén de uno o varios menores que no hayan cumplido 18 años por espacio de un año, podrá solicitar al juez de su domicilio la afiliación de los mismos.

Si el adoptante es casado deberá obtener, salvo impedimento, el consentimiento de su cónyuge, el que podrá solicitar la afiliación conjunta.

El afiliado mayor de 12 años y sus padres o representantes legales, también deberán prestar su consentimiento.

Art. 33. — El juez, ante de proveer a la demanda de afiliación, deberá informarse cuidadosamente sobre las condiciones económicas, morales y familiares del peticionante; sobre el trato prodigado por él al menor; sobre las condiciones físicas, morales e intelectuales de éste.

Serán oídos:

- a) Los parientes del menor que no se hallaren impedidos, tratándose de un menor huérfano;
- b) El funcionario bajo cuya guarda se hubiere hallado el menor o el director del instituto correspondiente si se tratare de menores aislados.

Art. 34. — El juez acordará o denegará la afiliación en auto fundado que será apelable.

El ministerio público será parte en los juicios de afiliación.

Art. 35. — La sentencia que acuerde la afiliación ordenará su inscripción en el Registro Civil correspondiente, aplicándose al respecto los artículos 14 y 15 sobre inscripción y publicidad de la adopción.

Art. 36. — El afiliante adquiere la patria potestad sobre el afiliado a cuyo mantenimiento y educación debe proveer.

Si el menor tuviere bienes será de aplicación el artículo 18 de la presente ley.

Art. 37. — El afiliado no adquiere derechos sucesorios en la herencia del afiliante, ni parentesco con el mismo.

Art. 38. — El afiliado añadirá al suyo el apellido del afiliante. Si se trata de un hijo ilegítimo no reconocido lo tomará pura y simplemente.

Art. 39. — No podrán contraer matrimonio:

- a) El afiliante con el afiliado o con los descendientes de éste;
- b) El afiliante con el cónyuge del afiliado y recíprocamente el afiliado con el cónyuge del afiliante;
- c) El afiliado con los ascendientes del afiliante.



Sin embargo, los impedimentos matrimoniales podrán ser dispensados judicialmente si median causas graves.

Art. 40. — Procede la revocación:

- a) En caso de inconducta o desviación grave del afiliado debidamente comprobadas;
- b) Si no pudiera el afiliante continuar manteniendo al afiliado;
- c) Por impugnación del afiliado cuando llegare a la mayoría de edad;
- d) Por mutuo acuerdo, siendo ambas partes mayores; si no lo fuere el adoptado, lo decidirá el juez con audiencia de quienes prestaron su consentimiento;
- e) Por el ministerio público, por razones de moral y buenas costumbres.

Art. 41. — La revocación hace cesar para el futuro los efectos de la afiliación dictada de acuerdo a las normas del artículo 30.

Art. 42. — La sentencia de revocación se inscribirá de acuerdo a los artículos 14 y 15 de esta ley.

Art. 43. — Si los padres privados de la patria potestad o tenencia de los hijos, fueren reintegrados en el ejercicio de la misma, el juez a instancia de los interesados, podrá declarar extinguida la afiliación.

Art. 44. — Cuando se legitimen o reconozcan menores afiliados, el tribunal decidirá si conviene al menor continuar la afiliación o quedar bajo la patria potestad de sus padres. En este último caso declarará extinguida la afiliación. Si la afiliación continúa el afiliado al cual se ha atribuido el apellido del afiliante, no asume el apellido del padre.

### CAPÍTULO III

#### De la legitimación adoptiva

Art. 45. — Se autoriza la legitimación adoptiva de menores abandonados o hijos de padres desconocidos que no hubieran cumplido 18 años de edad.

También podrán ser legitimados los pupilos del Estado, cuya situación de total abandono por parte de los padres exceda los tres años.

Art. 46. — Sólo podrá ser solicitada, en forma conjunta, por dos cónyuges que tengan más de diez años de matrimonio, que lo hubieran tenido bajo su guarda o tenencia por un término no inferior a tres años.

También podrán solicitarla el viudo o viuda y los esposos divorciados, cuando la guarda o tenencia del menor hubiera comenzado durante el matrimonio, y mediando el acuerdo de ambos cónyuges.

Art. 47. — La legitimación adoptiva será declarada por el juzgado de 1ª instancia del domicilio del adoptante.

Solo procederá existiendo justos motivos y conveniencias para el menor.

Los peticionantes ofrecerán la prueba pertinente.

La condición de menor abandonado se acreditará por sentencia ejecutoriada que declare la pérdida de la patria potestad.

En tal caso, el término de tres años a que se refiere el artículo 45, empezará a regir desde el comienzo del abandono.

Se considerará también dentro del término útil todo el tiempo de guarda comprendido en el período de abandono anterior a la sentencia.

El juez recibirá las pruebas ofrecidas y decretará además las que considere convenientes, pudiendo interrogar a los solicitantes conjunta o separadamente, y al menor en forma tal que no revele su condición.

Agregados todos los antecedentes se correrá traslado por diez días perentorios al ministerio público y asesor de menores, quienes podrán pedir las ampliaciones que creyeren convenientes.

El juzgado se manifestará acordando o denegando la legitimación, y su fallo será apelable ante el superior tribunal que podrá disponer también las mismas medidas preindicadas.

Art. 48. — Cuando se pretendiese legitimar a dos o más menores simultáneamente no será obstáculo la circunstancia de que mediase menos de 180 días entre los respectivos nacimientos. En ese caso el juez establecerá en la sentencia las fechas de nacimientos de cada uno, de manera que no se viole el plazo mínimo determinado en el artículo 240 del Código Civil.

Art. 49. — El demandante efectuará la inscripción del menor en el Registro del Estado Civil, como hijo legítimo inscrito fuera del término, mediante la presentación de un testimonio de la sentencia ejecutoriada que admite la legitimación.

En la partida correspondiente no se hará mención alguna del juicio y su texto será el corriente en dichos instrumentos.

El testimonio de la sentencia se archivará debidamente, dejándose constancia de haberse efectuado la inscripción mencionada.

Art. 50. — La tramitación será reservada en absoluto.

La violación del deber correspondiente por cualquier funcionario obligado, será penada de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 157 del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad civil.

El juzgado que entendió en el asunto podrá negar la exhibición, entrega o agregación del expediente, en trámite o archivado. Contra su resolución no habrá recurso alguno.

Cuando el menor fuese pupilo del Estado su ficha individual se destruirá juntamente con el expediente.

Art. 51. — Admitida la legitimación, se extinguirán los vínculos de filiación anterior del menor en todos sus efectos, salvo lo dispuesto en el artículo 9º de la ley de matrimonio civil en materia de impedimentos matrimoniales. Deberá hacerse constar dicho efecto en el acta de inscripción primitiva del menor.

Art. 52. — La legitimación adoptiva es irrevocable aunque posteriormente nazcan hijos legítimos.

Art. 53. — La legitimación adoptiva tendrá efectos constitutivos sobre el estado civil del menor, quien tendrá por efecto de la misma los mismos derechos y deberes que si hubiera nacido en matrimonio.

Art. 54. — La adopción anterior no será obstáculo para la legitimación adoptiva.

Art. 55. — Cuando el menor tuviese derechos cuyo dominio se acredite por documento público o privado, el juez ordenará que se inserte en él constancia breve que exprese el cambio de nombre del titular, de la que tomará nota el registro respectivo, cuando se trate de título justificativo de la propiedad inmueble o constitución de derechos reales.

Art. 56. — El guardador del niño tiene acción en los juicios de pérdida de patria potestad, siempre que lo promueva con el fin de legitimarlo.

Art. 57. — Se tendrán por no pronunciadas las sentencias; se clausurarán los procedimientos de los procesos; y no se procesará a nadie que haya incurrido hasta la sanción de esta ley, en el delito de inscribir como propio a un hijo ajeno, siempre que lo haya hecho por el impulso del afecto, con una finalidad social y humana.

#### CAPÍTULO IV

##### Disposiciones comunes

Art. 58. — En estos juicios se actuará en papel común y no se causarán costas.

La expedición de las correspondientes partidas del Registro Civil será gratuita.

Art. 59. — El tiempo transcurrido antes de la vigencia de esta ley podrá ser invocado a los fines que establece.

La exigencia de edad prevista en los artículos 7º 32 y 45, no regirá durante el plazo de un año respecto a los adoptados que en el momento de la publicación de la ley reúnan las demás condiciones requeridas.

Art. 60. — Cuando el juez compruebe que ha existido intención dolosa, pasarán los autos al juzgado de instrucción que corresponda, procediendo la acción pública para el castigo del delincuente.

*Solano Peña Guzmán. — Horacio Honorio Pueyrredón. — Arturo Frondizi.*

**Sr. Presidente (Bustos Fierro).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Benítez.** — Es preciso afrontar la reforma de buena parte de nuestra legislación. Me refiero a la legislación civil, comercial, penal, procesal, etcétera.

Nuestro país está ya en evidente retardo al respecto. Nadie lo duda. El propio Poder Ejecutivo de la Nación lo ha anunciado como labor inmediata y casi exclusiva del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. Lo considera también así esta Honorable Cámara. Por eso, la Comisión de Legislación General que presido y en cuyo nombre expongo los fundamentos del despacho que termina de conocer la Honorable Cámara, se ha puesto, apenas constituida, en la tarea de estudiar los proyectos de ley sobre adopción de menores que existían en ella, afrontando la modificación de un aspecto trascendente de nuestra legislación civil.

Tengo para mí que la revolución se consolidará, cuando traduzca en normas jurídicas sus propósitos, otorgando a nuestra vida civil del futuro la fisonomía que le asignan con rasgos ciertos e inconfundibles sus anhelos renovadores.

Ruego a los señores miembros de la minoría de la comisión que me excusen este pensamiento que aparece como avance de un con-

cepto político que pueden no compartir, pero que me permito señalar en nombre de su mayoría, expresando una convicción que he alentado siempre como hombre enamorado del derecho: la convicción de que la norma jurídica es el verbo inspirado de toda revolución, que fija sus ideales en estrofas sagradas, en síntesis perdurables. No otra cosa es la ley.

Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado los proyectos de ley sobre adopción presentados el 27 de junio de 1946 por el señor diputado Beretta y otros, y el 11 de junio de 1947 por el entonces señor diputado Peña Guzmán y otro colega. Pero aparte de haber estudiado los antecedentes que existen en el Honorable Congreso sobre la materia —senador Ramón S. Castillo, 29 de septiembre de 1933; Poder Ejecutivo de la Nación, ministro Jorge E. Coll, 27 de septiembre de 1938; diputado José A. Cabral, Código del Niño, 18 de junio de 1941; senador Ramella, 18 de junio de 1947; senador Gómez del Junco, 16 de julio de 1947 y Poder Ejecutivo de la Nación, ministro doctor Belisario Gache Pirán, 29 de agosto de 1947, ha apreciado, sobre todo, los especiales merecimientos del despacho formulado el día 4 de septiembre de 1947 por la Comisión de Legislación General, integrada en el período anterior por los señores diputados Argaña, Sarraute, de la Torre, Díaz Colodrero, González Funes, Pasquini, Nerio M. Rodríguez, Absalón Rojas y Velloso Colombres (orden del día número 473 del año 1947).

Debo rendir homenaje a la labor realizada por dicha comisión y al informe redactado como fundamento de su despacho por el ex diputado nacional doctor Justo Díaz Colodrero, ejemplar por lo conceptuoso, lo claro, y lo breve.

Con plena honradez intelectual debo declarar que la actual comisión, que ha compartido en lo fundamental el juicio de la anterior, sólo ha tenido que realizar una tarea de rectificación de algún aspecto que no altera la línea jurídica de aquel despacho, y debo declarar, asimismo, que el proyecto redactado en su hora por el doctor Jorge E. Coll —que ha consagrado lo mejor de su vida al estudio de nuestros problemas sociales y en especial al de los menores— es fuente directa de buena parte de las disposiciones cuya sanción aconsejamos a vuestra honorabilidad.

En materia exhaustivamente considerada por la doctrina y resuelta por la legislación, hemos debido circunscribir nuestra labor a elegir entre las soluciones propugnadas las que aparecen más conformes a nuestras costumbres, más adecuadas a nuestro común jurídico; labor de prudente juicio, más que de arriesgada creación.

Convenimos —no sin acallar algunas dudas— que al tiempo de dictarse nuestro Código Civil pudo pensarse con Vélez Sársfield que la adopción no era necesaria en la vida de la sociedad argentina, «porque no estaba en nuestras cos-

tumbres, no lo exigía ningún bien social, ni los particulares se habían servido de ella, sino en casos muy singulares».

Pero nuestra realidad social ha cambiado. Y a la realidad social, en el instante en que legisla, es a lo que debe atender el legislador.

«La estructura familiar de la colonia ha sufrido modificaciones, especialmente en los grandes núcleos urbanos, digo, repitiendo palabras del recordado informe del doctor Díaz Colodrero; la estructura demográfica de la República ha cambiado. Desgraciadamente, la probabilidad de nuestra raza se ha atenuado y hoy ya son raras las parejas con larga prole. El matrimonio estéril busca en el hijo adoptivo el objeto en donde derramar el instinto paternal, a falta del hijo de sangre que la naturaleza no le ha otorgado. De otra parte, la complejidad de la vida económica actual, la miseria y otras múltiples contingencias que azotan a los desvalidos de la fortuna, han creado una clase de infancia abandonada y sin padres en condiciones de atender a su presente y a su futuro. Estas circunstancias han hallado expresión múltiple, sea en la prensa periodística, en la labor de los institutos especializados, y en la acción permanente de hombres dedicados al trabajo científico, atentos siempre a los llamados de la realidad, que propugnan por la formación legal del instituto de la adopción. También una catástrofe que conmovió el sentimiento nacional hace pocos años, el terremoto de San Juan, fué oportunidad en que se evidenció el vacío de la legislación ante el cuadro desolador de niños que quedaron desamparados por la pérdida de sus padres; muchas personas, muchos matrimonios sin hijos acudieron a brindar protección a esos menores con el deseo de incorporarlos mediante un vínculo firme y perdurable, hallándose con que tal cosa no era posible, en razón de que para la ley positiva argentina no existe la adopción.»

A salvar los problemas sociales que suscitan las circunstancias apuntadas tiende el instituto de la adopción.

Por una parte, para brindar protección al menor; por otra, para dar hijos a quien no los tiene de su sangre. Atiende a ambos aspectos, colma dos vacíos, salva dos obstáculos sociales: el de una niñez desviada o en trance de desviarse, y el de una paternidad frustrada o imposible.

No es un mero procedimiento asistencial para cubrir la desolación de un niño abandonado, porque sería reducir innecesariamente sus beneficios y, al mismo tiempo, establecer un remedio que puede hallarse por otros caminos escogitados por la labor asistencial.

No es tampoco un contrato. Hemos desechado el criterio romano y apartado el concepto frances. Descartamos que sobre derechos esencia-

les de la persona pueda contratarse como se contrata sobre una cosa.

No es tampoco una mera imitación de la naturaleza. No creamos la ficción de una realidad. Creamos una realidad por sí misma. Aceptamos que aparte del vínculo de la sangre, impuesto por la naturaleza, pueden existir otros vínculos espirituales, éticos, fundados sobre los sentimientos que nacen entre quien presta cuidados y quien los recibe, entre quien moldea el alma de un niño, abre día a día sus ojos a la vida, enciende sus primeros sueños y orienta sus primeras luchas y el niño, que fué ahondando un afecto inspirado por la convivencia y el reconocimiento al hombre que se comportó como un padre excelente, sin otra obligación que la que le imponían sus sentimientos y sin otro provecho que la alegría de hacer de él un hombre bueno, noble y útil, satisfaciendo los requerimientos de una paternidad que aparecía frustrada.

«El afecto del adoptante —señala Coll— es todo altruismo. Y en el hijo ese cariño filial podría considerarse, desde un punto de vista espiritual, la forma más elevada del sentimiento humano.»

Legislamos con un fin altamente social, y creamos un instituto social, resguardado por el orden jurídico de la República, con contenido y finalidad eminentemente éticos.

Por eso hemos escogitado —para resolver problemas debatidos en la materia— las soluciones que más se acomodan a este propósito, cuidando en todo instante de resguardar hasta el máximo los intereses y derechos del menor, que por ser quien debe recibir más beneficios de esta legislación no debe sufrir ningún menoscabo de su aplicación.

Establecemos la adopción solamente para menores, y más precisamente para menores de 18 años. No creemos que las finalidades que ella persigue puedan cumplirse cuando el adoptado es un hombre ya formado, que por una parte no necesita ya protección y por otra no podrá desarrollar sentimientos que sólo nacen en la niñez. No creemos que sólo deba autorizarse para el niño abandonado, por las razones que ya señalé al comienzo, como también porque no es conveniente exigir públicamente la concurrencia de una causa, que marcando al menor con un estigma permanente, puede ser origen de un resentimiento en el menor, que sabe que sólo ha podido llegar a esta filiación legal por el camino de su desgracia.

Porque hemos organizado una filiación —con iguales responsabilidades y semejantes derechos que la filiación por razón de la sangre— le damos al hijo adoptivo los mismos derechos que nuestras leyes civiles atribuyen al hijo legítimo. Más brevemente: legítimo es uno y otro, por razones distintas, pero siempre por función de la ley. Las situaciones híbridas son siempre

fuentes de trastornos, y tienen todas las desventajas de las irregulares y ninguno de los beneficios de las claras y definidas.

Porque así lo hemos juzgado y declarado en el texto de la ley, no ha sido preciso en materia sucesoria, como en otros aspectos, que repetamos todas las disposiciones de nuestras leyes comunes que le son aplicables. Porque de suyo se sigue que ellas gobiernan su situación, y porque en la enumeración siempre existe el peligro de un olvido que pueda entenderse una alteración. Hemos establecido, por el contrario, únicamente las excepciones.

No prohibimos, como lo hacen algunas leyes —código italiano de 1939, uruguayo y venezolano— y lo hicieron otras —códigos Sardo y de Parma, etcétera—, la adopción de los hijos naturales. Seguimos el criterio de las legislaciones francesa y suiza, que no lo prohíben, y de la sueca y austríaca, que lo autorizan expresamente.

Se ha argüido, para establecer tal prohibición, que es un medio para dar a los hijos naturales los mismos derechos que a los legítimos y defraudar a los parientes en los bienes que la naturaleza y la ley le aseguran; que envolverá en la sospecha de su verdadero origen a todos los menores adoptados, porque si la ley autoriza la adopción de los hijos naturales, en cada adoptado se verá un hijo natural incorporado en esa forma a la familia.

Nosotros entendemos que no es concebible que se admita la adopción del extraño ligado sólo por vínculos sentimentales y no la del que aparte de estos lazos afectivos, tiene los de la sangre; que se establezcan los derechos y las obligaciones de un padre cuando únicamente media una razón afectiva y se lo prohíba cuando además de la razón afectiva existe la razón de la naturaleza; que el estrechísimo lazo de sangre impida lo que puede lograrse sin él o a causa de su falta. Nosotros entendemos que no es concebible que al que es padre se le prohíba ser padre, casualmente por serlo.

El prurito leguleyo, minúsculo, de que por este camino se quiere evitar el camino más recto de la legitimación, no cuenta. Porque, por encima de tal inconveniente menudo, eminentemente personal, están los intereses sociales, altruistas, que quieren defender y consolidar los intereses del menor, sin perjuicio de que, las más de las veces, la legitimación no es posible por subsiguiente matrimonio, porque uno de los dos padres contrajo matrimonio con un tercero, luego del nacimiento del hijo natural, o ha fallecido o se encuentra ausente. Y no es posible castigar al menor privándole de los beneficios de esta ley por la concurrencia de circunstancias tan ajenas a él.

No destruimos el vínculo originario, porque si bien la ley puede reconocer y consagrar una nueva vinculación nacida por afectos, no puede

borrar lo ya ocurrido. Pueden atemperarse por la ley los efectos de un hecho humano, pero no puede tenerse por no ocurrido el hecho humano ya acontecido.

Establecemos el vínculo familiar nacido lazos efectivos que unen al adoptante y adoptado, pero no aceptamos el vínculo familiar con los familiares del adoptante, ajenos, las más de las veces, a tales efectos. No concurrirían, para decidir lo contrario, los presupuestos que justifican aquella solución.

La patria potestad la ejercerá el adoptante. Porque ella es el instrumento vivo que le permitirá y le obligará a comportarse como un padre y al adoptado como un hijo. Y damos a este último el honor del apellido de su adoptante porque es el signo cierto que pone de manifiesto la situación de filiación y paternidad. No hemos autorizado las resoluciones cambiantes a este respecto, como lo hacen algunos de los antecedentes, porque creemos que la certeza es una exigencia inexcusable en toda materia delicada.

Queremos excluir la posibilidad de que la adopción sea un medio de provecho económico, deleznable, para el adoptante. De ahí que hayamos resuelto que no tiene el usufructo de los bienes del menor, ni lo hereda *ab intestato*.

Sr. Uranga. — Si me permite el señor diputado...

Sr. Benítez. — Sí, señor diputado.

Sr. Uranga. — Sin el propósito de molestarlo, le rogaría que levantara un poco la voz, porque le escuchamos con dificultad.

Sr. Benítez. — Muy bien, señor diputado.

Entendemos que esta vinculación familiar, entre adoptado y adoptante, debe estar rodeada de las mismas condiciones éticas que se exigen en la vinculación natural de padre e hijo. Entendemos más aún: que creada sólo sobre lazos de tal naturaleza, deben ser más estrictas las exigencias de tal especie, para que nada tuerza sus propósitos o convierta en peligrosa o inmoral una institución creada con las más nobles inspiraciones. Con tal criterio hemos establecido, con rigidez, los impedimentos matrimoniales a que se refiere el artículo 17 del despacho.

No quiero extenderme, señor presidente. En materia tan profusamente cuestionada, la erudición es fácil; pero no siempre lo fácil es conveniente. No me dejaría jamás conducir por el espejismo de una satisfacción personal. Debo cuidar también de traducir el pensamiento común —ya pedí excusas al comienzo por una desviación del principio— de los miembros de la comisión, sin perjuicio de que, sea en el curso de la discusión en general, sea durante la discusión en particular, pueda, como miembro informante, o pueda cualquiera de los ilustrados colegas que integran la comisión, suministrar a esta Honorable Cámara todas las explicaciones

que se crean precisas para poner en evidencia cuál fué la razón que ha inspirado cada una de las disposiciones del despacho que sometemos al alto juicio de vuestra honorabilidad. (Aplausos.)

**Sr. Presidente** (Bustos Fierro). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

**Sr. Yadarola.** — La incorporación del instituto de la adopción al derecho positivo argentino importa resolver un problema que el país lo tiene planteado desde hace tiempo, e implica también dar satisfacción a exigencias sociales ineludibles.

La adopción es un instituto de antiquísima data. Algunas ligeras referencias históricas será conveniente hacer, a efecto de que quede establecido que la creación que se proyecta no es una innovación en la vida del derecho.

En Roma el vínculo de la agnación se formaba por la familia legítima de orden u origen natural, y por la familia de orden o de origen legal. El vínculo de la sangre y el vínculo de la ley es lo que determinaba la formación de la familia en el derecho romano.

La adopción tenía el objeto fundamental de asegurar la continuidad de la familia y mantener también la perpetuidad del sentimiento religioso. En aquella vieja sociedad de amos y esclavos la familia representaba un factor fundamental, incluso para el ejercicio de los derechos civiles, tanto, que la muerte sin dejar descendencia implicaba, en muchos casos, la infamia para quien fallecía.

Entre los germanos, en la época en que entre ellos regía el derecho de origen romano, según la referencia que nos da Windscheid en su *Derecho de las Pandectas*, era una institución perfectamente aplicable y de eficacia incuestionable.

La adopción para los hombres o mujeres *alieni juris* y la arrogación para el que ya era *paterfamiliae* constituían las dos formas de organización de la familia legal, por oposición a la familia natural o de sangre. Con la particularidad de que aquella podía constituirse por *rescriptum principi*.

En la codificación francesa de la época de Napoleón se incluyó también el instituto de la adopción, pero fué legislado con el concepto de que sólo se la admitía para los mayores de edad en razón de que se la consideraba como un vínculo de índole típicamente contractual que no podía celebrarse sino entre personas mayores y capaces de contratar.

La guerra de 1914 reveló la total ineficacia de la institución así estructurada, pues hasta ese entonces no había tenido sino una aplicación muy limitada; y puso de manifiesto, también, la necesidad de la adopción de tantos menores huérfanos que la guerra había dejado en el más completo desamparo.

La reforma de 1923 eliminó la exigencia de la mayor edad a los efectos de la adopción y la admitió sin límite de edad, salvo el que resulte de la diferencia de edad entre adoptante y adoptado.

En nuestro país, Vélez Sársfield no incluyó la adopción en el Código Civil no obstante todos los precedentes que él tuvo a la vista, porque según él mismo lo refiere, se trataba de una institución sin arraigo en nuestras costumbres y sin posibilidad de aplicación.

Yo creo que lo que lo llevó a excluir la adopción de la magnífica organización de la familia que él había creado, fué más bien el prejuicio *jus naturalis* de que estaba poseído.

El hecho es que no se incluyó en la legislación civil el instituto de la adopción. Pero tanto la doctrina, como los congresos jurídicos, las asambleas para protección de la infancia y los tratadistas que estudian el problema de la niñez, han afirmado la necesidad ineludible de introducir este instituto en el derecho argentino. Más que todo eso, que podríamos decir son afirmaciones de orden teórico, de carácter científico, la realidad misma de la vida argentina está demostrando la necesidad de que se incorpore a nuestro derecho positivo este instituto de tan grande trascendencia social. En otros pueblos de América la adopción existe, en algunos desde hace muchos años y en otros desde épocas recientes. El Brasil la incorporó a su código civil en 1917; Perú la ha incluido también en su código civil en 1936; Chile dictó la ley especial de adopción en 1934; y la tienen también el Uruguay, Bolivia y Venezuela. Es decir que ya es, diríamos, una institución también del derecho americano. El código civil alemán y el suizo también legislan adecuadamente sobre el instituto de la adopción. Vale decir, señor presidente, que tanto en los países de América como en los de Europa el instituto de la adopción tiene ya carta de ciudadanía en la legislación positiva.

Para poder comprender adecuadamente el significado y alcance del instituto e, incluso, para que sirva de norma u orientación a la jurisprudencia que ha de formarse alrededor de esta nueva creación que propugnamos, será útil, aunque sea de manera breve, fijar la naturaleza jurídica del instituto.

Este punto ofrece, en mi concepto, un doble aspecto: uno es su carácter social y otro su naturaleza jurídica. Desde el punto de vista social, la adopción es un instituto de carácter típicamente familiar. Trata de estimular el sentimiento noble de paternidad y de filiación en aquellos sujetos o matrimonios que no han tenido hijos, a quienes la naturaleza no les ha permitido formar la verdadera familia natural o de sangre; tiende a despertar el sentimiento de amor a la infancia y de protección a la niñez, y a crear un motivo de arraigo en esos ma-



trimonios sin hijos, que, por no tenerlos, buscan la satisfacción de sus deseos y aspiraciones, e, incluso, cómo matar el ocio o el tedio, en distracciones que no siempre son las que convienen a su propio interés y al interés social.

De tal manera, entonces, que desde tal punto de vista esta institución, repito, de índole familiar, tiende a ir creando en los hombres ese sentimiento de paternidad y ese amor por el prójimo que ha de hacer más noble al hombre y más eficaz su acción en la vida.

Desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, tampoco será ocioso fijar cuál es mi concepto. En el derecho francés anterior a la reforma de 1923 no había dudas de que este instituto era de naturaleza estrictamente contractual. Si la adopción no podía existir sino entre mayores y se formalizaba por la voluntad de las partes, naturalmente el consentimiento de adoptante y de adoptado formaban la base esencial del instituto; de tal manera, la adopción resultaba con todos los caracteres necesarios y suficientes para dar existencia a un típico contrato de derecho civil. La reforma de 1923, como decía hace un instante, ha eliminado el límite de la edad para ser adoptado, excluyendo, diríamos así, esa restricción para los menores y, autorizando, en cambio, la adopción a cualquier edad. Esta circunstancia hace que cuando se adopta un menor no sea él quien puede dar su consentimiento; vale decir que la adopción no sería ya estrictamente un contrato que realizaría el adoptante con el adoptado.

Podría decirse en contra de esta afirmación que siendo exigible el asentimiento o la voluntad de los padres o representantes legales del menor, el contrato se formaría siempre entre esos representantes y el adoptado. Posiblemente, partiendo de este mismo concepto, que yo no comparto, los autores que han estudiado la nueva ley francesa, como Planiol y Ripert, sostienen que es una institución con muchos aspectos o caracteres de derecho público, pero cuando entra a definirla, el mismo Planiol la define como una institución de base contractual. Vale decir, que el concepto y la idea del contrato no han desaparecido totalmente de la preocupación y la mente de los juristas franceses en la elaboración de la naturaleza jurídica de la adopción.

Creo, sin embargo, que la idea del contrato debe descartarse. En la legislación italiana de 1939, que ha introducido algunas reformas fundamentales al viejo código de 1865, la doctrina considera que la base de esta vinculación, que el fundamento del vínculo de la adopción, está en la voluntad de las partes. Sin llegar a afirmar que se trata de una relación contractual, se reconoce, sin embargo, que la voluntad de las partes juega un rol preponderante en la formación del vínculo que crea la adopción.

Decía hace un instante que, a mi juicio, debe descartarse la idea del contrato como esencia o naturaleza jurídica de esa institución; pero no porque, como se ha dicho por algunos tratadistas, el contrato está ya en su ocaso o ha caído en una crisis definitiva porque el principio de la autonomía de la voluntad en que se asienta también ha hecho crisis y ha cumplido su ciclo. No. Yo afirmo, señor presidente, que el principio de la autonomía de la voluntad, base esencial de la contratación, no podrá desaparecer porque es la esencia de la libertad en las relaciones económicas y porque sería tanto como hacer desaparecer la libertad en las relaciones políticas o en la vida toda del hombre. He ahí porqué sin afirmar, y por el contrario sostener, que el contrato será siempre el medio más adecuado para las relaciones entre los hombres, excluyo, sin embargo, la figura contractual como elemento para fijar la naturaleza jurídica del instituto por una razón que para mí es de gran importancia: porque las relaciones contractuales fundamentalmente son de contenido económico y en cambio el vínculo que crea la adopción es esencialmente espiritual y moral. Por eso yo reconduciría este instituto a la figura de la «relación jurídica» ilustrada con docta maestría por Carnelutti, el insigne maestro que hace poco nos visitara, quien la define como el resultado de la combinación de dos intereses, uno prevalente o protegido y el otro subordinado.

Dentro de este concepto de relación jurídica elaborado, repito, magistralmente por Carnelutti, yo diría que la adopción es una relación jurídica de la cual por voluntad de las partes resulta un vínculo de familia restringido o limitado a adoptante y adoptado. Fijaría, entonces, la naturaleza jurídica del instituto como una relación jurídica que encuadra dentro de ese concepto y de la noción que acabo de exponer.

En síntesis, señor presidente, ha quedado establecido, según lo que acabo de afirmar, que el instituto de la adopción, si bien se apoya en elementos de la voluntad, es un instituto que excede los límites del contrato y que mejor se acomoda a esa nueva figura de la relación jurídica.

Resuelto así el problema de la naturaleza jurídica, tal cual yo lo entiendo, veamos cómo se constituye el vínculo de la adopción, es decir, cuáles son los elementos formales y sustanciales indispensables para que la adopción exista.

En algunas legislaciones —en el derecho alemán y en el Código Civil del Brasil, por ejemplo—, la adopción se constituye por escritura pública sometida, en Alemania, a la aprobación judicial. Nosotros hemos proyectado la institución sobre la base formal de una sentencia judicial.

Esa sentencia judicial, que es lo que crea el vínculo de la adopción, es una de esas sentencias que la doctrina llama sentencias constitutivas,

por oposición a las llamadas sentencias declarativas. No porque las sentencias constitutivas deban entenderse en el sentido que a todas las decisiones judiciales atribuye Kelsen, por ejemplo, de que ellas crean una norma jurídica primaria, es decir, que es creadora del derecho. No; una sentencia judicial de las denominadas constitutivas no es otra cosa que una sentencia en la cual el juez no traduce su propia voluntad sino la voluntad de la ley y que a su función jurisdiccional une la de modificar o crear un nuevo estado jurídico, sobre la base de normas preestablecidas que el juez se limita simplemente a aplicar. Es la concepción de Calamandrei la que, a mi juicio, sintetiza mejor el concepto de sentencia constitutiva.

La sentencia constitutiva significa, pues, en nuestro caso, que mediante el acto judicial nace o adquiere existencia jurídica el vínculo de la adopción. He ahí porqué esta sentencia es un requisito esencial para la existencia de esta relación jurídica, y he ahí también porqué los efectos de la adopción parten recién desde el instante en que se dicta la sentencia que la estatuye.

En el derecho francés se han establecido distintos momentos desde los cuales empieza a producir sus efectos la adopción: para ciertas situaciones desde el momento en que ha sido manifestada la voluntad de las partes; para con terceros desde la fecha de la sentencia. Entendemos que es una solución inconveniente, primero porque se trata de una única situación jurídica creada por la sentencia y porque los efectos de la adopción no tienen una trascendencia mayor entre las partes sino cuando ha adquirido, precisamente, la posibilidad de oponerse a terceros; y esta oponibilidad a terceros nace con la sentencia. Necesariamente la lógica y la técnica jurídica aconsejan hacer derivar todos sus efectos de un mismo momento, del momento de la sentencia que la consagra.

En cuanto a los requisitos de forma se exige que esta sentencia esté rodeada de todos los elementos necesarios para ser una tal sentencia; es decir, el proceso se abre y se substancia con la intervención necesaria de todas las partes que la ley establece. Si se hubiese incurrido en omisiones esenciales de forma, no se habría dictado una sentencia válida, y consiguientemente no se habría instituido la adopción.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, doctor Héctor J. Cámpora.

En cuanto a los requisitos de fondo, el proyecto ha establecido, en primer lugar, que no se puede adoptar sino cuando el adoptante ha cumplido cuarenta años. Sobre el particular las legislaciones difieren y van desde los cuarenta

hasta los cincuenta años como exigencia para poder adoptar.

La comisión se ha puesto, diríamos, en un término medio. Una persona que ha llegado a los cuarenta años de edad sin descendencia puede suponer que no ha de tenerla en adelante, y por consiguiente se abren para él las puertas que permiten la formación de esta otra familia, que no es ficticia, como afirman algunos autores, sino real y cierta, con una formación espiritual y moral que no difiere de la formación de la familia de origen natural.

En cuanto al límite de edad del adoptado, la comisión ha sido también prudente al establecer 18 años como máximo.

Hace unos momentos decía que las legislaciones francesa, italiana y alemana no establecen límites de edad para la adopción, de modo que un mayor de edad puede ser adoptado.

Dentro del sistema que la comisión ha seguido para estructurar su proyecto, entendemos que no debe aceptarse que cuando una persona ha llegado a una edad en cierto modo adelantada en su pubertad, o ha pasado a la categoría de mayoría, pueda ser objeto de adopción.

La adopción quiere crear el vínculo cierto de familia, quiere que se establezca entre el padre adoptivo y el hijo adoptivo ese vínculo espiritual y moral que hace a la esencia de la familia. Cuando se adoptan sujetos de mayor edad ocurre lo que pasó en Francia sobre todo antes de la reforma de 1923: la adopción no tiene más alcance y significado que dar un nombre al adoptado y permitirle la adquisición de la fortuna del adoptante. Para eso no valdría la pena legislar sobre adopción.

El concepto de la comisión es que la adopción es un instituto típicamente familiar, y la familia no se forma exclusivamente a base de dar un nombre y un patrimonio.

**Sr. Lucini.** — Si el señor diputado me permite voy a hacer una pequeña sugerencia, como colaboración.

Cuando el despacho se trate en particular, deseo se tenga en cuenta la distinta edad del adoptante, según sea varón o mujer, porque es evidente la diferencia que existe entre la condición biológica de la mujer y del hombre, en lo referente a la edad para adoptar.

**Sr. Yadarola.** — Muy bien; lo consideraremos cuando se trate en particular.

—Se ha establecido también que la adopción sólo puede realizarse cuando no exista descendencia legítima o natural. Sobre el particular, nuestro dictamen difiere de lo que establece la legislación italiana, por ejemplo, que permite la adopción cuando existen hijos naturales.

La comisión entiende que el hijo natural tiene un estado de reconocimiento en el derecho civil argentino: es hijo de su padre natural, tiene los derechos de tal y goza de de-

rechos sucesorios; más aún, hemos entendido que ese sistema que hace recaer en los hijos las consecuencias de las culpas, reales o supuestas de sus padres, es inicuo e injusto y, en consecuencia, es necesario atenuarlo en todo lo que la legislación o la concepción social del problema lo permitan. De ahí que entendamos que cuando hay descendencia natural o legítima no debe haber adopción. Se dirá que si no existe una descendencia natural reconocida no habría propiamente descendencia natural. Efectivamente, es así; pero también eso estaría previsto en la solución que yo he agregado como disidencia al despacho de la comisión en mayoría. Estaría previsto entre las causales de nulidad relativa la aparición de un hijo que hubiese nacido antes de la época de la adopción; de tal manera que el problema fundamental de la protección de los hijos naturales ha sido también contemplado.

Más aún, la comisión ha entendido que puede dársele el carácter de hijo adoptivo a un hijo ilegítimo cualquiera sea su clase. Por ese procedimiento se tiende precisamente a resolver esa situación de injusticia que recién he señalado. Cuando se habla de hijos ilegítimos se habla de todos aquellos que en términos generales así son considerados por la ley: el hijo natural, el hijo sacrílego como el adulterino o el incestuoso. En una palabra, todas las posibilidades de formación de esta familia de creación legal han sido establecidas en el despacho.

En cuanto a los efectos, resulta de la simple lectura del proyecto que la adopción produce los mismos efectos que la filiación legítima. Ha dicho muy bien el señor presidente de la Comisión de Legislación General, que no hemos querido crear ese tipo intermedio entre el hijo natural y el hijo legítimo, porque ello, en mi concepto, no es lógica ni jurídicamente aceptable.

Este estado de familia se establece entre el adoptante y el adoptado, y si bien el adoptado no entra en la familia legítima del adoptante, se establecen prohibiciones matrimoniales que importan en cierta medida crear el vínculo familiar entre el hijo adoptivo y el legítimo o los naturales reconocidos.

De la circunstancia de ser considerado el adoptado como hijo legítimo, resultan los derechos sucesorios en la herencia del adoptante; pero como la adopción tiende a proteger al adoptado —es una institución que se dirige esencialmente a crear esa protección—, se ha prohibido que el adoptante herede *ab intestato* al adoptado.

Las prohibiciones matrimoniales que la comisión aconseja están fundadas en la circunstancia que apuntaba hace un instante: de que el móvil que se persigue es el de crear una familia con todas las características esenciales de una fami-

lia de sangre. Siendo así, aun cuando no exista parentesco entre el adoptado y el hijo del adoptante que hubiese nacido después de la adopción, se establece la prohibición de contraer matrimonio entre ellos y también entre el adoptante y el adoptado o alguno de sus descendientes; están igualmente impedidos el adoptado con el cónyuge del adoptante y el adoptante con el cónyuge del adoptado, los hijos adoptivos del mismo adoptante entre sí. Tales prohibiciones tienen un sentido de orden moral del cual me parece que no podría prescindirse.

Se legisla también sobre la revocación. No es extraño que este instituto al cual, como decía hace un instante, se le ha querido dar todas las características o rodearlo de los elementos de la familia de sangre, pueda, sin embargo, ser destruido jurídicamente mediante la revocación, en aquellos casos excepcionales en que el motivo que determinó la formación del vínculo de la adopción ha desaparecido. Por eso la revocación se establece para aquellos supuestos que llamaríamos, en términos generales, de indignidad del adoptante o del adoptado, y en los casos particularísimos en que llegando el adoptado a la mayoría de edad quiera, de acuerdo con el adoptante, disolver el vínculo. Es una facultad que no puede ser negada al adoptado, porque no obstante todo lo que la ley quiere hacer para organizar esta familia de carácter estrictamente legal, es necesario que cuando un hombre llegado a la mayoría de edad no se sienta cómodo formando parte de una familia que no es su familia natural, pueda desvincularse de ella.

Finalmente, y aquí voy a referirme a la disidencia que subscribimos con mi colega el señor diputado Rojas, hemos proyectado también, en minoría, dos artículos que consagran dos tipos de nulidades, con aplicación particular a este instituto.

Se ha dicho más de una vez que la nulidades constituyen la selva oscura del derecho civil. No comparto ese concepto. Las nulidades son una manera de resolver determinadas situaciones de los actos jurídicos, en los que se han violado determinadas normas legales que no tienen nada de obscuro ni nada de complejo. Algunas fórmulas de nuestro Código Civil, posiblemente, dificultan su interpretación y su aplicación, pero cuando se recurre al derecho comparado y se examina el instituto de las nulidades en otras legislaciones, se advierte que no hay tal obscuridad y se aclara el panorama de su aplicación.

En el Código Civil las nulidades, no obstante tener un capítulo especial, no están regladas con absoluta precisión, al punto de que en muchas otras disposiciones el código habla de las nulidades de ciertos actos, y cuando trata de los actos jurídicos en términos generales establece también en qué casos dichos actos son nulos;

y cuando ha instituido el matrimonio civil, la ley establece determinadas y expresas nulidades. Cuando todo esto ha hecho nuestra legislación civil vigente, yo no advierto por qué para esta institución naciente en el derecho positivo argentino no hemos de legislar especialmente sobre nulidades, contemplando de modo concreto y preciso aquellos casos particulares y de mayor gravedad que son los que hemos incluido en nuestro dictamen en minoría.

Por eso, yo entiendo que quedaría completado este instituto de la adopción y legislado en la medida en que el hombre puede crear una legislación adecuada, abarcando toda la institución desde el nacimiento hasta su extinción, sea porque se la revoque, o sea porque se la anule.

Sintetizando, podría decir que si el Parlamento argentino sanciona esta ley sobre la adopción habremos dado un paso extraordinario en la solución de un problema que si es jurídico es también un problema social de trascendencia, y habremos permitido que en más de un supuesto personas afincadas, con posibilidades de criar otros seres humanos, entreguen sus afanes, sus preocupaciones y también sus bienes a un

verdadero hijo. He ahí la razón justificativa de este proyecto. (*¡Muy bien! ¡Muy bien! Aplausos.*)

**Sr. Astorgano.** — Pido la palabra para una moción de orden.

**Sr. Presidente (Cámpora).** — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

**Sr. Astorgano.** — Formulo moción de orden de que se pase a cuarto intermedio hasta el día de mañana a la hora habitual.

**Sr. Presidente (Cámpora).** — Se va a votar la moción del señor diputado por la Capital, de que la Honorable Cámara pase a cuarto intermedio, para continuar la sesión mañana a la hora habitual.

—Resulta afirmativa de 85 votos; votan 108 señores diputados.

**Sr. Presidente (Cámpora).** — Invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta mañana a la hora habitual.

—Es la hora 21 y 20.